

S.J.: 119/2024

Se ha recibido en este Servicio Jurídico, para su preceptivo informe, el proyecto de ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DEL METRO DE MADRID. TRAMO: PLAZA ELÍPTICA – CONDE DE CASAL” A/OBR-036452/2021, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – DRAGADOS, S.A.- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE METRO LINEA 11), el 2 de agosto de 2022.

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tenemos el honor de emitir el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El contrato fue adjudicado por orden de fecha 2 de agosto de 2022 a la Unión Temporal de Empresas ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – DRAGADOS, S.A.- ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE METRO LINEA 11, con un importe de adjudicación de 500.649.591,88 euros, IVA incluido.

El documento contractual se formalizó el 2 de octubre de 2022.

SEGUNDO.- El 5 de noviembre de 2022 se levantó acta de comprobación del replanteo, estableciéndose como fecha de comienzo de las obras 7 de noviembre de 2022.



TERCERO.- Con fecha 17 de agosto de 2023 el órgano de contratación autorizó la redacción del proyecto modificado nº1.

Mediante orden de fecha 16 de noviembre de 2023 se autorizó la continuación provisional de las obras.

El proyecto modificado nº 1 ha sido aprobado por orden de fecha 14 de mayo de 2024.

CUARTO.- Con fecha 17 de junio de 2024 la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo ha efectuado propuesta de modificación basada en la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 204 y los apartados a), b) y c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Con fecha 18 de junio de 2024 se ha dictado orden de inicio del procedimiento de modificación del contrato.

QUINTO.- Mediante comunicaciones de fecha 18 de junio de 2024 se ha notificado orden de inicio del expediente de modificación y apertura del trámite de audiencia al contratista y al redactor del Proyecto, dado que el Proyecto ha sido preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación, la UTE GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A. – AUDINGINTRAESA S.A. E INVESTIGACIÓN Y CONTROL CALIDAD S.A. en virtud de un contrato de servicios.

En fecha 19 de junio de 2024, el contratista ha prestado conformidad al modificado con reserva de sus derechos a la reclamación de daños y perjuicios.



En fecha 21 de junio de 2024, el proyectista ha presentado escrito manifestando que no formula alegación alguna.

SEXTO.- A la solicitud de informe se acompaña el proyecto de Orden correspondiente, así como el expediente tramitado para la modificación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Procede, en primer lugar, determinar el régimen jurídico aplicable al expediente de modificación.

A tenor de la Disposición Transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), apartados 1 y 2:

“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se registrarán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se registrarán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

El contrato analizado se adjudicó el 2 de agosto de 2022; por tanto, el régimen jurídico aplicable al presente modificado será el previsto en la vigente LCSP.



Segunda.- La legislación de contratos de las Administraciones Públicas tradicionalmente consagra, entre las prerrogativas de la Administración en la contratación pública, la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP:

"Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta".

La jurisprudencia ha señalado que el llamado *ius variandi*, esto es, el poder de la Administración de modificación unilateral del contrato, es una de las más trascendentales características del contrato administrativo, en cuanto que implica una separación del principio básico en materia contractual de *pacta sunt servanda* (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1987). Constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus términos y la admisibilidad de que la Administración pueda variar tales condiciones en determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado *ius variandi* de la Administración, pero con sometimiento a determinados requisitos, para evitar la indebida alteración de los principios que rigen la licitación pública.

Así, y como ha recordado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el sometimiento a cauces estrictos del *ius variandi* de la Administración tiene su razón de ser precisamente en la salvaguarda del principio de concurrencia y licitación pública



que preside la contratación administrativa. Se advierte igualmente que tal facultad debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos (Dictámenes de 10 de septiembre de 1998, 5 de diciembre de 1984 y 24 de julio de 2003), todo ello, por cuanto un uso indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas.

Tercera.- El régimen jurídico de modificación de los contratos del sector público se contiene fundamentalmente en los artículos 203 y siguientes LCSP, el primero de los cuales, señala:

“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;*
- b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.*

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.”.



En consecuencia, en sede de modificación contractual, la LCSP distingue en función de que dicha modificación esté prevista o no en el pliego; en el primer caso, se regirá por el artículo 204, mientras que en caso de que no esté prevista, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 205.

En el presente caso, se prevé cuatro causas de modificación previstas en el pliego, y diez no previstas.

En relación con las causas previstas, el artículo 204 de la LCSP señala:

“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global



del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

Por su parte, el apartado 22 de la cláusula 1 del pliego, prevé la modificación del contrato en varios supuestos, entre los que figuran los siguientes:

“1. Condiciones en que podrán efectuarse: aparición de terrenos con características geotécnicas o hidrogeológicas diferentes a las contempladas en el Proyecto.

Naturaleza: cambio de los procesos constructivos, realización de tratamientos del terreno, medidas de estabilización geotécnicas o instalación de equipos de medición o control adicionales.

Alcance y límites: podrá suponer el incremento o disminución de las unidades de obra previstas o la introducción de unidades nuevas.

2. Condiciones en que podrán efectuarse: en el caso de que los servicios afectados realmente existentes no coincidan con los contemplados en proyecto debido a errores en el proyecto o a información incorrecta o incompleta proporcionada por parte de terceros incluida en el proyecto.

Naturaleza: introducir en la obra las unidades necesarias para posibilitar la ejecución de las obras correspondientes a actuaciones adicionales no contempladas en proyecto relacionadas con la reposición de servicios afectados.

Alcance y límites: podrán suponer el incremento o disminución de las unidades de obra previstas, o la introducción de unidades nuevas.

Porcentaje del precio del contrato al que, como máximo, podrán afectar las modificaciones: el límite máximo será el 20% del precio inicial”.

Las causas previstas son las siguientes:

.- Como consecuencia de una campaña hidrogeológica y geotécnica, realizada en el inicio del contrato con más de 380 metros de material testificado y ensayos de laboratorio sobre 116 muestras; se ha comprobado que las características



hidrogeológicas y geotécnicas de los terrenos ensayados son diferentes a las contempladas en el Proyecto, exigiendo un cambio del proceso constructivo, que afecta a la configuración de los muros pantalla de contención de las estaciones, a las losas de las estaciones y a la maquinaria requerida para la ejecución de los muros pantalla de las Estaciones de Comillas y Madrid Río. Ello supone una disminución del 5,15% sobre el precio del contrato vigente.

.- Como consecuencia de una campaña geotécnica, realizada en el inicio del contrato con más de 380 metros de material testificado y ensayos de laboratorio sobre 116 muestras; se ha comprobado que las características geotécnicas de los terrenos ensayados son diferentes a las contempladas en el Proyecto, exigiéndose un cambio del proceso constructivo en la ejecución del túnel:

1- Reducción en la velocidad de avance de la tuneladora y aumento en la cantidad de aditivos a utilizar en el frente de excavación de la tuneladora, respecto a las previstas en el proyecto.

2- Configuración del metro lineal de anillo en dovelas trapezoidales, en lugar de las rectangulares previstas en proyecto.

Cambio del proceso constructivo en las entradas y salidas de la tuneladora a su paso por las estaciones sustituyendo los tratamientos de inyecciones de consolidación por tratamientos de micropilotaje, lo que supone un importe adicional de 5.050.970,79€, que representa un incremento del 1,01% sobre el precio del contrato vigente.

.- En tercer lugar, en dos localizaciones del proyecto se observa que las características hidrogeológicas de los terrenos superficiales encontrados son diferentes a las contempladas en proyecto. El objeto de esta modificación es el cambio del proceso constructivo sustituyendo los tratamientos de JET GROUTING tipo 2 por tratamientos mediante pilotaje, lo que supone una minoración del precio del contrato de 195.906,43 euros, que representa una disminución del 0,04% sobre el precio del contrato vigente.



.- Finalmente, el servicio afectado realmente existente no coincide con el contemplado en el proyecto debido a información incorrecta o incompleta facilitada por parte de terceros. En este caso el servicio afectado es un colector de saneamiento, sito en el subsuelo de Avenida de Ciudad de Barcelona, operado por el Canal de Isabel II. Durante la fase de redacción del Proyecto vigente Canal de Isabel II abrió expediente nº 2018_EXP_000035265 y, en distintas comunicaciones, se obtuvo la información digital requerida por el proyectista en formato digital CAD. Dicha información ubicaba el colector de saneamiento en la posición señalada en los planos del Proyecto vigente. Realizada comprobación “in situ” por el personal de obra el colector de saneamiento no aparece en la ubicación indicada por el Proyecto vigente. Por lo que la información incluida en el Proyecto vigente, recibida en la fase de redacción del proyecto por parte del CYII, es incorrecta. La ubicación real de dicho colector interfiere con el trazado del túnel (paso de la tuneladora) entre el punto kilométrico (pk) 4+785 y el pk 4+905, bajo la avenida Ciudad de Barcelona en las proximidades de Atocha. Ello exige la introducción en la obra de las unidades necesarias para posibilitar la ejecución de las obras correspondientes a actuaciones adicionales de reposición del colector del saneamiento, bajo la Avenida Ciudad de Barcelona, no contempladas en el proyecto. El importe adicional es de 1.833.334,39 €, lo que supone un incremento del 0,37% sobre el precio del contrato vigente.

Por lo que respecta a las causas no previstas, el artículo 205 LCSP indica:

“1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.*
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.*



2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:



1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación”.

Como causas no previstas en el pliego, el Proyecto de Orden consigna las siguientes:

.- Al amparo del artículo 205.2 a), se indica que con fecha 17 de marzo de 2023, la Jefatura del servicio de Instalaciones Especiales de la Subdirección General de



Instalaciones Urbanas, de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, remite informe referente a las afecciones al túnel de Conde de Casal por el proyecto constructivo de Ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid que contiene requerimientos sobre la adaptación del equipamiento necesario para cumplir el RD 635/2006 de seguridad en túneles mayores de 200 metros, ya que en el proyecto constructivo el túnel existente se alarga hasta una longitud de 327 metros. Los requisitos del RD son de obligado cumplimiento para los túneles de la red de carreteras del Estado, y no para el caso de túneles urbanos, por esta razón no fueron recogidos en el proyecto vigente; sin embargo, durante la fase de ejecución, el titular y gestor de la infraestructura exige que se incluyan. El objeto de la modificación es añadir las obras adicionales precisas para completar las inicialmente contratadas, y cumplir los requerimientos del titular de la infraestructura (Ayuntamiento de Madrid) acordes al RD 635/2006 de seguridad en túneles mayores de 200 metros, que se corresponden con las siguientes instalaciones: electricidad y alumbrado, ventilación, protección contra incendios, comunicaciones, señalética y cuartos técnicos. El importe adicional es de 3.541.396,54 €, lo que supone un incremento del 0,71% sobre el precio del contrato vigente.

.- Al amparo del artículo 205.2 a), se indica que el Proyecto vigente, con la información existente en el momento de la redacción del proyecto constructivo, recoge una única acometida eléctrica desde la subestación de la calle Antonio Leyva. Con posterioridad a la adjudicación del contrato, la compañía suministradora Iberdrola comunica con fecha 5 de diciembre de 2022 y referencia de escrito 9041726931 la necesidad de tener 2 acometidas eléctricas: una desde la subestación de calle Antonio Leyva y otra desde subestación del distrito de Arganzuela y la necesidad de adecuar el centro de seccionamiento para dichas acometidas. El importe adicional es de 781.557,38 €, lo que supone un incremento del 0,16% sobre el precio del contrato vigente.

.- Al amparo del artículo 205.2 b), se indica que es necesario modificar las obras inicialmente contratadas debido a que la Dirección General del Espacio Público, Obras



e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, dentro de los estudios para la recuperación del Bien declarado Patrimonio Mundial “El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias del Ayuntamiento de Madrid”, ha formulado requerimiento en fecha 27 de abril de 2023 de reordenación (urbanización) de la superficie del entorno de Atocha, respecto de la distribución de carriles, aceras, espacios peatonales y Monumento de las Víctimas del 11M; diferente a la existente actualmente, que es la que considera el Proyecto vigente. El importe adicional es de 26.397.550,83 €, lo que supone un incremento del 5,27 % sobre el precio del contrato vigente.

.- Al amparo del artículo 205.2 b), se indica que ante las sugerencias y quejas recibidas por parte de la ciudadanía, comunidades de vecinos y distintas asociaciones, así como la repercusión mediática debido a la previsión de tala de árboles necesaria para ejecutar el proyecto de ampliación de línea 11, se hace necesario modificar las ocupaciones en superficie para reducir el número de ejemplares afectados; las quejas presentadas se realizan una vez que la obra ya ha sido adjudicada, y no durante la fase de tramitación y aprobación del proyecto constructivo. El importe adicional es de 7.339.928,39 €, lo que supone un incremento del 1,47 % sobre el precio del contrato vigente

.- Al amparo del artículo 205.2 c), se indica que se ha constatado una incompatibilidad entre el Proyecto vigente y el Proyecto del Intercambiador de Conde de Casal, redactado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, al cual se ha tenido acceso en febrero de 2023. Dicho Intercambiador se situará sobre la Estación de línea 11 de Conde de Casal El Proyecto vigente contempla un sistema de termoactivación en dovelas del túnel de la Línea 11 para ser usado como sistema de eficiencia energética por parte de la estación de Conde de Casal y del Intercambiador de Conde de Casal. Comprobada la compatibilidad del sistema (termoactivación de dovelas del túnel) del Proyecto vigente con el Intercambiador diseñado por CRTM se constata que no es energéticamente eficiente, y por tanto no compatible. El importe adicional es de 306.699,02 €, lo que supone un incremento del 0,06% sobre el precio del contrato vigente.



.- Al amparo del artículo 205.2 c), se indica que el trazado del Proyecto vigente de la Línea 11, a su paso por el Paseo de las Delicias circula bajo la Línea 3 en el entorno de la estación de Delicias. Sometido el Proyecto a la fase de Información Pública no se recibió manifestación alguna en contra de dicho trazado. El Proyecto vigente contempla, a su paso bajo la estación de metro de Delicias, la ejecución de un tratamiento del terreno tipo micropilotaje desde el interior del túnel de L3; a fin de evitar las afecciones durante la ejecución del túnel de L11 antes indicada. Metro de Madrid en fecha de 25 de julio de 2023 ha requerido que “se desestime la ejecución de micropilotes desde el interior de la Línea 3, buscando una solución alternativa que no conlleve ocupación temporal en la estación de Delicias y su entorno”, requiriendo, por lo tanto, que no se ejecuten las obras tal y como están previstas. El objeto de esta modificación es el cambio de trazado del túnel de línea 11, entre el pk 2+700 y el pk 3+660, para no afectar a la estación de Delicias de L3. La modificación supone una minoración del precio del contrato de 1.274.777,74 euros, lo que supone una disminución del 0,25% sobre el precio del contrato vigente.

.- Al amparo del artículo 205.2 c), se indica que el trazado del Proyecto vigente de la Línea 11, a su paso por la Avenida del Mediterráneo, circula bajo el Parking de Avenida del Mediterráneo número 28. Sometido el Proyecto a la fase de Información Pública no se recibió manifestación alguna en contra de dicho trazado. El Proyecto vigente contempla, a su paso bajo el Parking de Avenida del Mediterráneo número 28, la ejecución de un tratamiento del terreno tipo pilotaje desde el interior del citado Parking; a fin de evitar las posibles afecciones durante la ejecución del túnel de L11 antes indicada. Es necesario autorización del propietario del parking para la realización de las obras proyectadas en el interior de su parcela. En escrito presentado por la Propiedad del Parking de Avenida del Mediterráneo número 28 en fecha de 11 de agosto de 2023 se deniega cualquier tipo de autorización para la ejecución de trabajos que se pretenda llevar a cabo desde el interior de su propiedad privada, requiriendo, por lo tanto, que no se ejecuten las obras tal y como están previstas. El objeto de esta modificación consiste en ejecutar pozos en el exterior del aparcamiento desde los que acometer los



tratamientos del terreno consistentes en paraguas de protección horizontales a base de micropilotes para proteger el parking de Avenida del Mediterráneo. Dicha actuación se situará entre los puntos kilométricos (PK) 5+922 y PK 6+042 del túnel de L11 en 120 metros de longitud. El importe adicional es de 1.484.018,60 €, lo que supone un incremento del 0,30% sobre el precio del contrato vigente.

.- En octavo lugar, al amparo del artículo 205.2 c), se indica que durante la fase de redacción del Proyecto vigente Canal de Isabel II mantuvo reuniones con los redactores del proyecto; en 2 correos electrónicos de fecha de 17 de diciembre de 2020 Canal de Isabel II indicaba que las galerías a reponer tendrán “las dimensiones mínimas de una galería visitable son 0,80 m * 1,80 m (Galería Tipo 0)”. Dicha indicación fue recogida en el Proyecto vigente. Con posterioridad a la adjudicación del contrato, se establece contacto con Canal de Isabel II para realizar dichos trabajos. Mediante los escritos del Canal de Isabel II CTS 1186, CTS 1196 y de fecha 29/03/2023 se indica que los colectores visitables tendrán dimensiones de 1,00 m * 1,80 m (Galería Tipo I). El objeto de esta modificación es sustituir las Galerías tipo 0 recogidas en el Proyecto vigente por Galerías tipo I. El importe adicional es de 131.692,65 €, lo que supone un incremento del 0,03% sobre el precio del contrato vigente.

.- En noveno lugar, al amparo del artículo 205.2 c), se indica que durante la redacción de proyecto los redactores del proyecto mantuvieron reuniones con Canal de Isabel II. Mediante correo electrónico con fecha 29 de marzo de 2021 el Canal de Isabel II da conformidad a las soluciones proyectadas para 3 válvulas reductoras de presión, pertenecientes a la red de Abastecimiento del Canal de Isabel II, situadas en: — Mariano de Cavia — Doctor Esquerdo — M-30 , arroyo Abroñigal, considerándose un diámetro de válvula de 300 mm; solución que se incluye en el Proyecto vigente, apareciendo en el presupuesto en el capítulo 8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. Con posterioridad a la adjudicación del contrato, se establece contacto con el Canal de Isabel II para realizar los trabajos de colocación de las válvulas. Con fecha 9 de agosto de 2022 se recibe correo electrónico del Canal de Isabel II indicando que las dimensiones necesarias son



250 mm (Mariano de Cavia y Doctor Esquerdo) y 400 mm (M-30, arroyo Abroñigal). La modificación supone una minoración del precio del contrato de 44.058,44 euros, lo que supone una disminución del 0,01% sobre el precio del contrato vigente.

.- En último lugar, al amparo del artículo 205.2 c), se indica que en el Proyecto vigente se prevé la reposición de una galería municipal de servicios en el entorno de Conde de Casal, más concretamente: — acera y calzada de Avenida del Mediterráneo Sur — cruce de Avenida del Mediterráneo Sur hacia Avenida del Mediterráneo Norte. Para proteger esta actividad se realiza un tratamiento del terreno, en este caso el Proyecto vigente contempla la realización de un Jet Grouting tipo 2. Para ejecutar este tratamiento deben estar definidos y localizados los distintos servicios subterráneos existentes entre la futura galería municipal y la superficie. Durante la redacción de proyecto los proyectistas mantuvieron comunicaciones con los distintos proveedores de servicios subterráneos existentes. A raíz de estas comunicaciones se mantuvieron reuniones con Canal de Isabel II y Nedgia (gas). Nedgia mediante correo electrónico con fecha 22 de noviembre de 2018 indica método operativo de obtención de localización de sus conducciones. Otro tanto sucede con Canal de Isabel II (referencia de expediente 2018_EXP_000035265) en correo de fecha 8 de noviembre de 2018. Y de esta forma quedaron reflejados en el Proyecto vigente, Sin embargo, los mismos no se encuentran en la ubicación indicada; discurren de forma irregular, desplazados en el punto más desfavorable hasta 2 m respecto a su ubicación prevista. También aparecen unas conducciones en el subsuelo, de los cuales no se recibió ningún tipo de información durante la fase de redacción de Proyecto (Tubería hormigón de saneamiento de 200 mm de diámetro, fuera de servicio sin propietario conocido. Galería ladrillo que alberga un tubo de fundición de 200 mm, perteneciente a Canal de Isabel II).

Este cambio de localización en los servicios pertenecientes a Canal de Isabel II y Nedgia; y la aparición de nuevas conducciones no permiten ejecutar el tratamiento Jet Grouting tipo II. Por lo que es necesario ejecutar un tratamiento del terreno capaz de proteger la ejecución y el mantenimiento de la galería municipal proyectada, lo que



supone una minoración del precio del contrato de 2.486.533,27 euros, lo que supone una disminución del 0,50 % sobre el precio del contrato vigente.

Teniendo en cuenta todas las causas descritas y sus respectivos importes, las modificaciones proyectadas suponen un incremento del 3,41 % del precio del contrato original, y una ampliación del plazo de ejecución del contrato de 18 meses.

Del examen de las razones aducidas para justificar el presente modificado, si bien de carácter eminentemente técnico, este Servicio Jurídico puede concluir que las modificaciones propuestas cumplen los requisitos exigidos, tanto por el apartado 22 de la cláusula 1, como por el artículo 205 LCSP.

Cuarta.- En relación con el procedimiento a seguir, como indica la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid (por todos, sus Dictámenes de 29 de octubre de 2015 y de 25 de septiembre de 2013), la normativa procedimental a aplicar debe ser la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de interpretación, modificación y resolución, por aplicación de las disposiciones transitorias del Código Civil, erigidas en derecho intertemporal común. En idéntico sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en sus Dictámenes 3062/1998 y 975/2002, así como el Dictamen 328/2012, de 27 de diciembre, del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

Así, el artículo 191 LCSP, dentro del capítulo relativo a las prerrogativas de la Administración Pública, regula el procedimiento de ejercicio de estas prerrogativas, señalando:

- “1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.*
- 2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889132503525672933941

Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:

a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista.

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”.

Además, habrá de tenerse en cuenta, como señalan los Dictámenes 511/12 y 515/12, de 19 de septiembre de nuestro órgano consultivo, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la normativa contractual, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

Por lo demás, de forma concreta para las obras, el artículo 242, apartados 1, 2 y 4 LCSP, señala:

“1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la



modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.

(...)

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:

- a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.*
- b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.*
- c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos”.*

Examinado el expediente, se comprueba que la tramitación del expediente de modificación ha cumplimentado las exigencias anteriores, habiéndose dado audiencia, tanto al contratista como al redactor del proyecto.

Quinta.- Finalmente, desde una perspectiva meramente formal, no se alcanza a comprender la distinción entre el régimen jurídico del contrato, y el régimen jurídico de la modificación, puesto que el régimen jurídico del contrato será el que determine las reglas jurídicas aplicables a la modificación, parte integrante de aquél.





En todo caso, si se quiere mantener esta distinción, se recomienda suprimir la frase inicial del Fundamento de Derecho Primero, que indica que “*este contrato tiene carácter administrativo*”.

En virtud de lo expuesto, procede emitir la siguiente

CONCLUSIÓN

El proyecto de Resolución de modificación sometido a Informe **merece el parecer favorable** de este Servicio Jurídico, sin perjuicio de las recomendaciones efectuadas.

Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

Madrid, a fecha de firma

LA LETRADA JEFE EN LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES,
E INFRAESTRUCTURAS

Firmado digitalmente por: RECARTE LLORENS CRISTINA
Fecha: 2024.07.01 11:02

Fdo.: Cristina Recarte Llorens

**ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES, E INFRAESTRUCTURAS**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0889132503525672933941**